



LA GACETA

Diario Oficial

RICARDO
SALAS
ALVAREZ
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
RICARDO SALAS
ALVAREZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.23
15:31:12 -06'00'



Imprenta Nacional
Costa Rica

La Uruca, San José, Costa Rica, martes 27 de julio del 2021

AÑO CXLIII

Nº 143

80 páginas



Será más atractiva, pronto lo verás...



Imprenta Nacional
Costa Rica

Asimismo, la Administración deberá brindar, en el plazo de ley, toda la información y documentación que le sea solicitada por parte del Lanamme UCR, para que este lleve a cabo las tareas que le fueron encomendadas.

El Lanamme UCR informará al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las Municipalidades, así como a las demás entidades públicas relacionadas con la red vial nacional y cantonal, el resultado final de las auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas a la red vial nacional pavimentada, las carreteras y los puentes en concesión. Asimismo, informará para lo que a derecho corresponda a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes.

Las disposiciones resultantes de las auditorías técnicas señaladas en el párrafo anterior tendrán carácter vinculante y deberán ser acatadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las Municipalidades, así como, por las demás entidades públicas relacionadas con la red vial nacional y cantonal, en la ejecución de obras. En caso de incumplimiento, el Lanamme UCR remitirá el asunto a las auditorías internas correspondientes y a la Contraloría General de la República para que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, en especial la Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, estas determinen las responsabilidades del funcionario o los funcionarios remisos, y las sanciones que deban ser aplicadas a tales funcionarios.

Rige a partir de su publicación

Sylvia Patricia Villegas Álvarez
Diputada

NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—(IN2021567982).

**“LEY DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
A TRAVÉS DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”**

EXPEDIENTE N° 22.573

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La lucha por las maternidades y paternidades responsables a través de la salud sexual y reproductiva lleva más de 30 años con el liderazgo de grupos feministas, organizaciones de mujeres y agrupaciones en pro de la niñez. Un logro importante por parte de estas colectivas fue la aprobación del Decreto Ejecutivo N°27913-S del 14 de mayo del 2019, donde se estableció:

- 1°-Que es función del Estado velar por la salud de la población.
- 2°-Que la salud de la población es un producto social y como tal se construye a partir de las condiciones de vida particulares de los (las) individuos (as), grupos sociales y comunidades.
- 3°-Que estas concepciones de salud se sustentan en las concepciones de Derechos Humanos políticos, sociales y ambientales y en el desarrollo de la ética en la atención de la salud.
- 4°-Que nuestro sistema democrático se basa en la libertad individual y en el respeto a los Derechos Humanos y que una sociedad democrática sólo puede crecer y desarrollarse si cada uno de los (las) individuos (as) tienen esa posibilidad en todos los campos de su vida.
- 5°-Que es responsabilidad indelegable del Estado Costarricense velar por la protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, así como respetar y cumplir los compromisos internacionales asumidos en esa materia, que reconocen el derecho de todas las personas a controlar todos los aspectos de su salud y, en particular, su propia capacidad reproductiva.
- 6°-Que es obligación del Estado Costarricense respetar el principio de autonomía de voluntad de hombres y mujeres mayores de edad.
- 7°-Que en la atención de la salud o de la enfermedad se genera la obligación de fortalecer la autonomía y respetar la integridad de las personas para tomar decisiones relativas a su salud.

8°-Que el respeto a la autonomía y a la integridad exigen en los servicios de salud, el intercambio horizontal y respetuoso de conocimientos y saberes, por medio de una verdadera educación y participación social en salud, que hacen posible una construcción solidaria y humana del derecho a la salud.¹

Este Decreto Ejecutivo también incluyó el derecho de las personas a acceder a métodos de anticoncepción quirúrgica a través del consentimiento informado y realizó la desvinculación del aval masculino sobre las decisiones de esterilización femenina. De acuerdo a la publicación “Diez años después de aprobada la ley de derecho a la esterilización en Costa Rica” de Doris Fernández Carvajal y Paula Sequeira Rovira, se establece que:

Según datos del periódico La Nación (12), entre 1998 y 1999, se realizaron alrededor de 23 200 salpingectomías, dato que se incrementó en un 53 %, cinco años después. Esto da cuenta de la importancia de este Decreto en términos de abrir posibilidad a más mujeres para operarse (p.112)²

Si bien es cierto el Decreto Ejecutivo N°27913-S significó un importante avance en el logro de paternidades y maternidades responsables, aún quedan muchas deudas por saldar, a como lo es la garantía del trato digno y de acuerdo a fundamentos científicos. Ante este tipo de vacíos es que se presenta este proyecto de ley, que busca garantizar el derecho de la población a acceder a métodos anticonceptivos autorizados y a recibir un trato digno basado en fundamentos científicos a la hora de solicitar el uso de métodos anticonceptivos.

El acceso a este tipo de técnicas, ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas, es un avance en derechos humanos que necesita ser normado por ley. Este expediente representa el apoyo al derecho de acceso a la salud, normado por instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De igual manera, la aprobación de este proyecto de ley ayudaría a contrarrestar el efecto de problemáticas sociales como el embarazo adolescente – que en el 2018 afectó a 4019 adolescentes menores de 18 años y a 7 niñas menores de 13 años⁻³, los embarazos no deseados y los abortos clandestinos.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**LEY DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
A TRAVÉS DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

ARTÍCULO 1- Objeto

La presente ley tiene como objetivo garantizar el derecho de la población a:

- a) Acceder a métodos anticonceptivos autorizados en los servicios del sistema salud con el fin de promover paternidades y maternidades responsables a través de la salud sexual y reproductiva;
- b) Recibir un trato digno basado en fundamentos científicos a la hora de solicitar el uso de métodos anticonceptivos;

ARTÍCULO 2- Atención de las personas solicitantes de métodos anticonceptivos

La persona profesional médica interviniente que reciba una solicitud de aplicación de método anticonceptivo deberá tramitar la misma según la normativa vigente. En ningún caso puede prohibirse esta solicitud sobre la base exclusiva de:

- a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso;

1 Decreto Ejecutivo N°27913-S, Presidencia de la República: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR TC&nValor1=1&nValor2=30022&nValor3=99531&strTipM=TC

2 Fernández Carvajal, D., Sequeira Rovira, P. (2011). Diez años después de aprobada la ley de derecho a la esterilización en Costa Rica. *Rev Costarr Salud Pública*, 20 (2). Recuperado de: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/rcsp/v20n2/art7v20n2.pdf>

3 INEC. (2018). Estadística de Nacimientos del 2018. Recuperado de: <https://www.inec.cr/multimedia/embarazo-adolescente-en-costa-rica-2018>

b) Conflictos familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en las comunidades;

- c) Sexualidad, identidad de género o expresión de género;
- d) Estado civil de la persona solicitante;
- e) Historial de relaciones sexuales.

ARTÍCULO 3- Consentimiento informado

La persona profesional médica interviniente debe informar a la persona solicitante del método anticonceptivo la siguiente información sobre su aplicación o consumo:

- a) La naturaleza del método anticonceptivo solicitado;
- b) Los beneficios de utilizar métodos anticonceptivos autorizados;
- c) Las implicaciones en la salud de la persona paciente;
- d) Los otros tipos de métodos de anticoncepción autorizados en el país y sus cualidades;

e) Las características del procedimiento a realizar o del producto a consumir. En el expediente clínico de la persona usuaria del servicio de salud debe constar la proporción de dicha información junto con la firma de la persona profesional médica interviniente y la persona paciente.

Todas las personas que presenten alguna discapacidad tienen derecho a recibir información adecuada a sus capacidades que les permita la toma de decisiones respecto de su salud sexual y su salud reproductiva, incluyendo el derecho a dar su consentimiento informado.

ARTÍCULO 4- Anticoncepción no quirúrgica

El Estado garantizará de manera gratuita los métodos de anticoncepción no quirúrgica a las personas mayores de 13 años que así lo soliciten al centro de salud correspondiente.

ARTÍCULO 5- Anticoncepción quirúrgica

El Estado garantizará de manera gratuita los métodos de anticoncepción quirúrgica a las personas mayores de edad que así lo soliciten y expresen su intención y consentimiento informado al centro de salud correspondiente.

La anticoncepción quirúrgica está prohibida en los casos donde:

- a) No exista consentimiento informado por parte de la persona a la cual se le realizará la intervención quirúrgica.
- b) La persona usuaria del servicio de salud sea menor de edad.
- c) Se evidencie que la solicitud y el consentimiento informado para recibir el método de anticoncepción quirúrgica se deriva de la coerción de terceros.
- d) La persona solicitante de la anticoncepción quirúrgica no haya recibido a la hora del procedimiento toda la información relacionada a las implicaciones del procedimiento.

ARTÍCULO 6- Recuperación de la persona paciente

Las personas que se sometan a métodos anticonceptivos quirúrgicos tienen derecho a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestas por la persona médica interviniente según la normativa vigente.

ARTÍCULO 7- Registro de intervenciones

Todos los centros de salud del país deberán mantener un registro de las personas solicitantes de métodos anticonceptivos y de las personas que accedieron a un método anticonceptivo quirúrgico.

ARTÍCULO 8- Disposiciones Transitorias

TRANSITORIO I- Dentro de un plazo máximo a los cuatro meses siguientes a la publicación de esta ley, el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla para garantizar su operatividad.

TRANSITORIO II- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contará con un plazo de dieciocho meses, después de la entrada en vigencia de esta ley, para iniciar con la capacitación establecida, según sus competencias.

Rige a partir de su publicación.

Paola Viviana Vega Rodríguez
Diputada

NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.
1 vez.—Exonerado.—(IN2021567947).

LEY DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON PERSONALIDAD JURÍDICA INSTRUMENTAL

Expediente N° 22.577

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es el órgano encargado de gestionar, regular y controlar las obras de infraestructura pública en el país, de conformidad con las Leyes N° 3155 del 5 de agosto 1963 y N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas.

En el desarrollo de la referida infraestructura pública, el MOPT cuenta con la participación de una serie de órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental, según sus ámbitos funcionales especializados. Esos órganos son específicamente los siguientes:

- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), creado mediante la Ley de Administración Vial, Ley N° 6324 del 24 de mayo de 1979 y sus reformas.

- Consejo de Transporte Público (CTP), creado por la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Ley N° 7969 del 22 de diciembre de 1999 y sus reformas.

- Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), creado por la Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI), Ley N° 7798 del 30 de abril de 1998.

- Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), creado por la Ley General de Aviación Civil, Ley N° 5150 y sus reformas del 14 de mayo de 1973.

- Consejo Nacional de Concesiones (CNC), creado por la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley N° 7762 del 14 de abril de 1977 y sus reformas.

En el desarrollo de los proyectos de infraestructura, la actividad contractual del Ministerio y sus órganos desconcentrados está regulada en la actualidad por la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, sin perjuicio del régimen especial de contratación aplicable en materia de concesiones, fideicomisos o bien en el caso de proyectos con financiamiento externos debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa.

En la actualidad, el MOPT y sus órganos desconcentrados, con especial énfasis en el caso del CONAVI, enfrenta procesos de investigación judicial por eventuales irregularidades en la actividad de contratación pública, que podrían implicar eventualmente la calificación de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico vigente.

Esta situación es de suma gravedad y podría dar origen en una primera instancia a la imposición de medidas cautelares en el plano judicial a las personas físicas o jurídicas que participen en los procesos de contratación administrativa.

En el tanto se concretan los procesos judiciales respectivos, se crea un espacio temporal en el que resulta indispensable garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública que promuevan el MOPT y sus órganos desconcentrados, así como la eficiencia y eficacia de esos mismos procedimientos. La participación directa o indirecta en esos procedimientos de personas físicas y/o jurídicas sobre las que pesen medidas cautelares activas en procesos de índole judicial por hechos relacionados con la actividad contractual del MOPT y/o sus órganos desconcentrados, resulta inconveniente para el interés público, pues afecta la transparencia de la actividad contractual pero además implica la posibilidad de que se otorguen nuevos contratos a personas físicas y/o jurídicas que por su condición judicial específica no resultan ser contratistas idóneos, por las eventuales consecuencias de los procesos judiciales en curso, que puede comprometer la eficiente y eficaz ejecución de los contratos.

Por lo tanto, se considera indispensable establecer una limitación razonable a la participación directa o indirecta de esas personas físicas y/o jurídicas, para salvaguardar el interés público, en atención a los referidos principios de transparencia, eficiencia y eficacia, a los que constitucionalmente está sujeta la actividad contractual pública.